

La antidemocrática

Se lee con algo de sorpresa el simplismo con el que se analiza el golpe de Estado en Honduras en algunos medios de comunicación, tanto españoles como internacionales. La opinión pública se deja llevar por su tendencia a separar entre buenos y malos y, por lo general, desconoce la enorme irresponsabilidad y falta de respeto por las instituciones democráticas hondureñas de las que hizo gala el depuesto Presidente Zelaya en los meses previos al golpe. Su ciega cruzada en contra del legislativo, el judicial y la Junta Electoral por celebrar una consulta popular para cambiar la Constitución y poder presentarse a finales de este año a un nuevo mandato condujo al país a una profunda crisis política y dividió incluso a su propio partido. La consulta que Zelaya pretendía realizar el 30 de junio infringía la legislación y no hubiera cumplido con las garantías necesarias a causa de la improvisación y los problemas técnicos. Así, en medio de esta crisis, se produjo un ejercicio de desobediencia, en este caso no civil, protagonizado por el Jefe del Estado Mayor, que desencadenó el enfrentamiento con el ejército. Aunque es discutible su legalidad, posiblemente fue legítima en términos democráticos la negativa del general Romeo Vásquez a poner los medios para la celebración de los comicios, por ir en contra del criterio expreso de la Junta Electoral, la institución que posee en Honduras dichas atribuciones. Ante este acto de desacato castrense, el Presidente redobló su ímpetu, destituyó al general y dio órdenes para que continuasen los preparativos. Sin embargo, el ejército respaldó al general y respondió desplegando tropas el viernes 26 de junio en torno al Congreso, lo que generó incidentes violentos. Aunque sostuvo que mantenía su imparcialidad y que el despliegue tenía como objetivo proteger a los diputados de posibles ataques de los partidarios de Zelaya, no cabe duda de que se trataba de una amenaza directa de lo que podía pasar y pasó. Sin embargo, y en medio de esta difícil situación, el Presidente en un acto que denota una limitada visión de Estado, calificó ya este despliegue de golpe de Estado, al tiempo, que dio el visto bueno al envío por avión de las urnas y las papeletas desde la Venezuela de Hugo Chávez para que se celebrasen los comicios, que ya, no cabe duda, se hubieran celebrado sin las mínimas garantías y en medio de graves tensiones.

Por tanto, se puede comprender hasta cierto punto la frustración de los partidarios del actual gobierno hondureño por el rechazo generalizado al golpe por parte de todos los gobiernos del resto del mundo, y por el tratamiento que recibe de la prensa extranjera, cuando se habla de la vuelta del golpismo dictatorial de los 80 a Centroamérica. Sin embargo, sus pretensiones de minimizar la gravedad de los hechos o describir el golpe de Estado como un ejercicio democrático de destitución de un Presidente no pueden engañar a nadie. El asalto en mitad de la noche de la residencia de Zelaya y su expulsión inmediata en ningún caso puede ser legal, y no se realizó como algunos sostienen con órdenes previas de ninguna institución. La votación, al día siguiente en el Congreso, aprobando la destitución y ratificando el nombramiento interino de Michelletti se hace una vez rota la legalidad constitucional y con el ejército por detrás como árbitro parcial. En dicha votación se presentó, además, una carta de renuncia supuestamente firmada dos días antes por Zelaya, de muy dudosa autenticidad, y que deja intuir la gestación del golpe en una trama premeditada. La orden de arresto de la jueza Maritza Arita del lunes 30 divulgada el martes acusando al Presidente de 18 delitos, entre ellos el de "traición a la patria", tampoco da mayor legitimidad al golpe. Por último, como buena prueba de las remotas posibilidades de legitimar el golpe, cabe recordar la condena de Washington que, aunque en un principio algo tibia y siempre sin una mención expresa de apoyo a Zelaya, fue una decisión impuesta por los hechos y a pesar de las pésimas relaciones de la Casa Blanca con el bloque regional liderado por Hugo Chávez del que Zelaya es un representante más.

